

# Las fuerzas sociales y políticas ante el evento electoral

César Artiga

Resumen

*El siguiente artículo caracteriza someramente las posturas de quienes estiman que los sucesivos eventos electorales son una muestra clara del proceso de democratización y las de quienes piensan exactamente lo contrario a partir de la posición adoptada ante los comicios del 20 de marzo. La caracterización está hecha desde la perspectiva de las fuerzas sociales y políticas involucradas en el proceso político salvadoreño.*

*No se trata de dar cuenta de las concepciones e ideas genéricas de democracia presentes en esas fuerzas sociales y políticas, sino de caracterizar la postura concreta de las mismas frente a las elecciones del 20 de marzo.*

## 1. Introducción

A lo largo de los últimos cuatro años, con ocasión de los diversos procesos electorales que se han desarrollado en Centroamérica, el tema de la transición a la democracia en la región ha saltado al primer plano tanto en el ámbito de la discusión teórica de índole sociológica, como al nivel del análisis y de la praxis políticos concretos. En enorme medida, este creciente interés por dicho tema encuentra su explicación última en la propia tradición política de la región, la cual incluye diversas variedades de autoritarismo, imposición frau-

dulenta, militarismo, etc. Según Mark Rosenberg, de los 46 cambios de gobierno que se han operado a partir de 1948 en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, solamente 22 se efectuaron a través de elecciones, y de éstos el 50 por ciento fue acompañado por alguna forma de fraude: "elecciones con candidato único, elecciones con fraude y elecciones en donde se ha elegido a un líder militar son las que han dominado el escenario político de la región desde 1948."<sup>1</sup> Es comprensible que, sobre este sombrío trasfondo histórico, el reciente desarrollo político de Centroamérica

parezca en su conjunto aceptablemente democrático. En contraste con sus antecedentes históricos inmediatos y mediatos, la coyuntura política que vive actualmente la región, aun en medio de una profunda crisis socio-económica, presenta rasgos que no pocos de los propios agentes políticos y sociales involucrados en el proceso centroamericano, y de los analistas del mismo han estimado como indicios del avance hacia la democracia.

Aparentemente, el proceso político salvadoreño no ha sido ajeno a esa dinámica regional. Más aún, ha sido presentado en repetidas oportunidades —tanto por Estados Unidos como por el propio gobierno salvadoreño y por otras fuerzas políticas, nacionales e internacionales— como paradigma de la transición hacia la democracia que se estaría dando en Centroamérica y modelo a seguir por aquellos países en que esta transición sería aún vacilante o estaría incluso empantanada. Entre las pruebas de este avance democratizador del proceso salvadoreño se suele esgrimir el conjunto de eventos electorales que se han dado en el país desde 1982 hasta la fecha. Estos eventos serían las elecciones para designar a los integrantes de la asamblea constituyente, realizadas el 28 de marzo de 1982; la primera y segunda rondas de las elecciones presidenciales de 1984; los comicios para diputados y concejos municipales de 1984; y el reciente evento electoral del 20 de marzo recién pasado, también para designar diputados y concejos municipales. En total, se trataría de cinco eventos electorales en el curso de seis años.

El dato en sí mismo amerita ya una cuidadosa consideración política. Básicamente, las posiciones que los agentes políticos y sociales directa o indirectamente involucrados en el proceso salvadoreño han adoptado frente a esta maratónica racha de eventos electorales serían dos. Por un lado, la de quienes han visto en ella una muestra palmaria de que el país se habría encaminado al fin, con paso seguro, por la senda de la democratización, aun cuando esto no suponga necesariamente

que ya se haya logrado instaurar plenamente la democracia. Por otra parte, la de quienes estiman que los sucesivos eventos electorales habidos en el país durante el último lustro han sido inefectivos en términos de democratizar el proceso político o siquiera sentar las bases para la institucionalización de la democracia. Según esta segunda postura, la prolongación del conflicto bélico y la profundización y agudización de la crisis socio-económica subyacente a la guerra constituirían un menfís rotundo a ese presunto proceso de democratización.<sup>2</sup>

El presente artículo apunta a caracterizar someramente ambas posturas a partir de la posición concreta que ante los comicios del 20 de marzo han adoptado algunas fuerzas sociales y políticas involucradas en el proceso político salvadoreño. Esta caracterización debe entenderse a la luz de ciertas precisiones metodológicas que es pertinente formular desde ya.

En primer lugar, no pretendemos caracterizar la posición de dichas fuerzas sociales y políticas frente a la cuestión electoral en general, sino frente a la coyuntura concreta del 20 de marzo. Desde luego, lo segundo está condicionado por lo primero y remite a ello, de modo similar a como la posición frente a la cuestión electoral remite al problema del modelo mismo de democracia que se estima idóneo para el país. La postura frente a las elecciones está intrínsecamente permeada por las ideas y actitudes asumidas frente al sistema de partidos, el problema de las clases sociales, las relaciones de poder que se establecen entre ellas, el papel del Estado dentro del proceso socio-político, etc. Asimismo, la postura que se adopte frente a la cuestión electoral constituye una radiografía de las ideas y actitudes asumidas frente al problema de la naturaleza del conflicto que azota al país y de las causas que lo han originado y alimentan. Normalmente, quienes parten de un concepto liberal de democracia y consideran los procesos electorales como nota constitutiva de un sistema democrático, tienden a

## En los comicios se jugaba "el futuro de El Salvador," esto es, la permanencia del PDC en el poder formal del Estado y con ello la prolongación del proyecto reformista.

considerar que los eventos electorales últimos habidos en El Salvador han permitido al proceso político dar pasos sustanciales en la vía de la democratización. Por el contrario, quienes piensan que las elecciones constituyen un adminículo meramente formal de la democracia y estiman que lo esencial de un sistema democrático consiste en su capacidad para satisfacer las necesidades materiales y espirituales básicas de su población, opinan que El Salvador se encuentra todavía a doscientas leguas de la democracia. Sin embargo, insistimos, el presente artículo no aspira tanto a dar cuenta de las concepciones e ideas genéricas de democracia presentes en las fuerzas sociales y políticas consideradas, sino a caracterizar la postura concreta que estas fuerzas han manifestado frente a los comicios legislativos y municipales del 20 de marzo.

Es necesario perfilar siquiera escuetamente el término de "fuerzas sociales y políticas" al que hasta ahora nos hemos referido con imprecisión. Se trata de un término sociológico de difícil definición conceptual, como en general ocurre cuando se trata de precisar ciertos conceptos concernientes al problema de la estructuración social.<sup>3</sup> Para el caso de El Salvador, Segundo Montes ha intentado una caracterización no sólo de las fuerzas sociales concretas operantes en la sociedad salvadoreña, sino de la noción misma de "fuerza social," la cual define así: "Al hablar de 'fuerzas sociales' me estoy refiriendo a aquellos conjuntos de personas que constituyen un ente social, es decir, que tengan algún tipo de interrelación entre ellas, pero que para que se constituyan en verdaderas fuerzas sociales no basta con su mera existencia informal, sino que deben estar constituidas como tales, es decir, dotadas de algún tipo de organización o institucionalización."<sup>4</sup> Nuestro propósito no requiere entrar a la discusión teórica por-

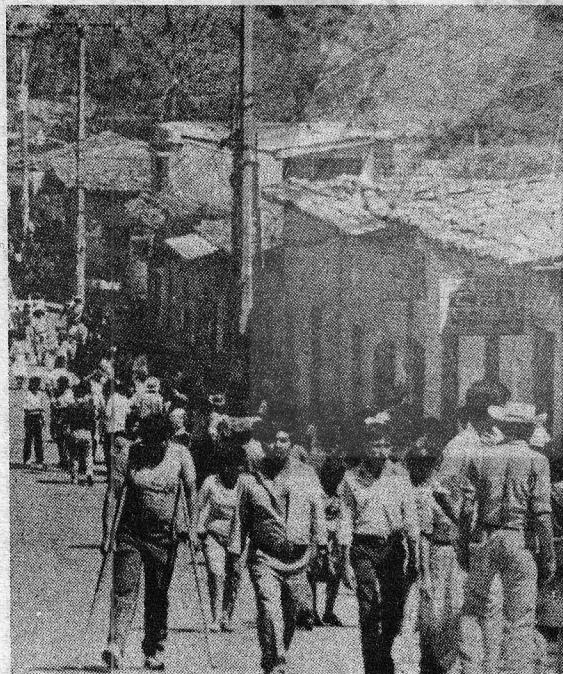
menorizada del concepto de "fuerza social," de modo que podemos contentarnos con la noción ofrecida por Montes.

No obstante, consideramos útil introducir una precisión adicional, relativa a la distinción entre lo que serían fuerzas "sociales" y lo que serían fuerzas "políticas." Esta distinción parece sutil y requeriría una fundamentación más rigurosa que la que podemos ofrecer en este trabajo. Con todo, de acuerdo a nuestros propósitos, podemos formularla así: las fuerzas política serían aquellas que, aún siendo sociales, estarían organizadas en función de la toma del poder político, entendiendo por tal el control del poder del Estado. Las fuerzas "sociales," en cambio, no aspirarían en cuanto tales al poder político. Así, bajo la categoría de fuerzas "políticas" entrarían por definición los partidos políticos, pero también fuerzas organizadas de presión social que, aun cuando no estuviesen formalmente incorporadas al sistema político, aspirarían por su cuenta a la toma del poder político. Este último sería el caso, por ejemplo, del FMLN. También sería el caso, en cierto modo, de la Fuerza Armada, la cual controlaría una cuota importante del poder político real aun cuando sus estatutos institucionales la declaran formalmente apolítica. Bajo la categoría de fuerzas "sociales," en cambio, quedarían comprendidas diversas organizaciones de naturaleza gremial como los sindicatos, las organizaciones empresariales, y otras fuerzas como podrían ser los medios de comunicación social, las iglesias, las universidades, etc. Desde luego, la distinción en cuestión no obsta para que la actividad de las fuerzas "sociales" tenga siempre connotaciones políticas e incluso repercusiones directas en la esfera del poder político. Como tales, las fuerzas sociales inciden inexorablemente en el curso de los procesos políticos e incluso

podrían acceder coyunturalmente al poder formal del Estado a través de su alianza con fuerzas formalmente políticas (el pacto social entre el PDC y la Unidad Popular Democrática sería un ejemplo de ello), pero no es éste un rasgo constitutivo suyo.<sup>5</sup>

En conjunto, haremos más énfasis en los puntos de vista de las principales fuerzas sociales, antes que en los de las fuerzas políticas, aun cuando intentaremos recoger y sintetizar la postura del FMLN y de la Fuerza Armada, que en nuestra opinión son más bien fuerzas políticas antes que sociales.

En lo posible, en tercer lugar, hemos intentado caracterizar la postura de las fuerzas sociales y políticas consideradas, a partir de su toma de posición explícita ante la coyuntura electoral del 20 de marzo. En ciertos casos, algunas de esas fuerzas definieron expresamente su posición a través de pronunciamientos formales (tal fue el caso de ANEP, la Cámara de Comercio e Industria, el FMLN, etc.). La mayor parte de las veces, sin embargo, ha sido necesario rastrear su toma



de posición a lo largo de las declaraciones más o menos espontáneas vertidas por sus representantes a la prensa. En todos los casos, ha sido necesario someter, tanto los pronunciamientos y comunicados formales, como las declaraciones informales, a una lectura hermenéutica que pueda darnos cuenta de la estructura política profunda de los discursos.

## 2. Las fuerzas sociales y políticas aquiescentes ante los comicios del 20 de marzo

Según lo hemos apuntado más arriba, las posturas básicas frente a las elecciones del 20 de marzo por parte de las diversas fuerzas sociales y políticas involucradas en el proceso salvadoreño, pueden dividirse en dos vertientes: la de quienes opinan que, pese a sus posibles deficiencias, el evento ha representado un paso más en el proceso de institucionalización de la democracia en El Salvador; y la de quienes consideran que las circunstancias de guerra y de la crisis socio-económica imperantes en el país hacen inviable la realización de elecciones efectivamente democráticas. En este apartado, sintetizamos la postura de las principales fuerzas sociales y políticas comprendidas en la primera vertiente.

En ésta estarían ubicadas todas aquellas fuerzas que, según una terminología gramsciana, hegemonizarían directa o indirectamente la conducción del bloque histórico imperante actualmente en el país.<sup>6</sup> En tal situación se encontrarían, en primer lugar, por definición, el propio aparato gubernamental y su expresión partidaria, el PDC, considerado por sus opositores políticos como partido "oficial," pero también estarían comprendidos los propios partidos políticos de oposición incorporados formalmente al sistema partidario (ARENA, PCN, Liberación, PAISA, POP, PAR, MERECEN y AD) así como las organizaciones gremiales de la empresa privada (ANEP, ASI, Cámara de Comercio e Industria, SCIS, etc.), en la medida en que tanto los partidos de oposición como las gremiales empresariales coadyuvan en

último término a la reproducción del bloque histórico prevaleciente, más allá de sus contradicciones secundarias con la gestión demócrata cristiana. Igualmente, también estarían situadas en esta vertiente aquellas organizaciones laborales que hasta la fecha han actuado como base social de apoyo del PDC. Asimismo, habría que ubicar acá a la Fuerza Armada, cuyo acoplamiento al proyecto político diseñado por Estados Unidos para El Salvador la ha llevado, con creciente autoconciencia institucional de ese rol, a jugar un papel cada vez más determinante dentro del proceso de institucionalización de la democracia, en contraste paradójico con las profesiones de apoliticidad del alto mando. Finalmente, también habría que colocar dentro de esta primera vertiente a Estados Unidos, que si bien no entra formalmente dentro de las categorías "fuerzas sociales" o "fuerzas políticas" a que hemos hecho alusión más arriba, constituye factualmente un factor histórico de influencia decisiva sobre el desarrollo del proceso socio-político salvadoreño.<sup>7</sup>

### 2.1. Las asociaciones gremiales de la empresa privada

Para la empresa privada, el 20 de marzo constituía un hito decisivo en el desarrollo histórico reciente del proceso socio-político salvadoreño. En un comunicado difundido el 18 de marzo, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), refiriéndose a la coyuntura electoral, manifestaba que El Salvador vivía "momentos de trascendental importancia para los destinos del país."<sup>8</sup>

Esta "importancia trascendental" del evento del 20 de marzo derivaba, en primer término, de su inscripción en la línea de esfuerzos políticos tendientes a restablecer en el país el "Estado de derecho" y restituir la institucionalidad del orden constitucional quebrantado por el proyecto reformista a partir de 1980. Tras ocho años de vigencia de dicho proyecto y tres años y medio de desastrosa gestión demócrata cristiana, desde la óptica de ANEP, los comicios del 20 de

marzo, aun siendo solamente para diputados y concejos municipales, no constituían un evento electoral más, sino un acontecimiento histórico decisivo en términos de definir el futuro político del país.

ANEP partía del supuesto de que "nuestro país está enfrentado a una situación sumamente delicada que es imperativo superar para evitar que nuestra patria se desplome en el caos total."<sup>9</sup> No hacía falta justificar por qué ANEP consideraba tan "delicada" la situación ni qué razones podía esgrimir para suponer que el país podría desplomarse en el "caos total" de no superarse esa situación. Lo importante era resaltar el carácter histórico trascendental del evento y deducir de ello un corolario concreto para la praxis política: "las elecciones del domingo tienen un carácter verdaderamente histórico y nadie que se precie de buen salvadoreño debe desperdiciar su voto, emitiéndolo irreflexiva e irresponsablemente," "cada ciudadano debe reflexionar detenidamente sobre el voto que va a emitir el próximo domingo y debe tener en mente que estas elecciones van a decidir definitivamente el futuro de El Salvador, la vigencia o el aniquilamiento de la libertad y la soberanía de los salvadoreños."<sup>10</sup> Casi resulta inútil resaltar que se trataría de una "libertad" entendida desde la perspectiva más radical del *laissez faire*: en un párrafo ulterior del comunicado, ANEP precisa que lo que está en juego es "la plena vigencia de las libertades individuales." En tales condiciones, la concurrencia a las urnas se imponía como un imperativo categórico ante cuyo valor absoluto perdía todo sentido la alternativa entre votar o no votar. Hasta tal punto consideraba ANEP como una exigencia moral insoslayable el acudir a las urnas que estimaba que "el no votar es traicionar a la patria." La concurrencia a las urnas cumplía al menos dos propósitos: por un lado, mostrar un "total repudio al terrorismo izquierdista," cuya campaña intimidatoria pretendía obstaculizar los comicios; por otro lado —y este sería incluso el propósito principal—, despo-

## Lo que está en juego es la plena vigencia de las libertades individuales: ANEP.

jar al PDC del control de la asamblea legislativa y de la red de poderes municipales.

En su formulación superficial, el comunicado de ANEP no establecía responsabilidades respecto de la crisis socio-política que atraviesa el país. Tampoco explicitaba bajo qué circunstancias consideraba que el voto podría ser desperdiciado o emitido irresponsablemente. En su estructura profunda, sin embargo, el planteamiento empresarial asumía que el responsable principal —al menos localmente— del "caos total" al borde del cual se encontraría El Salvador, es el PDC, incluso más que el FMLN; y que, por lo tanto, votar por el PDC equivalía a ejercer el sufragio irresponsablemente. Ello arroja nuevas luces sobre las razones de ANEP para considerar que los comicios del 20 de marzo revestían tal importancia histórica. El evento representaba para los empresarios —a través de sus instrumentos políticos, particularmente de ARENA— una oportunidad política inapreciable para desbancar al PDC de la asamblea legislativa e iniciar la recuperación del poder formal del Estado en orden a propiciar desde la gestión gubernamental el giro de 180 grados que el sector privado ha venido demandando reiteradamente en materia de política económica.<sup>11</sup> En otras palabras, el 20 de marzo se jugaba la posibilidad de revertir el control demócrata cristiano sobre el órgano legislativo y, a partir de allí, emprender la recuperación del terreno político ganado por la democracia cristiana desde 1980 e iniciar la reversión del proceso reformista contra el cual los empresarios no han cesado de despotricar visceralmente a lo largo de estos años de crisis. A eso era a lo que ANEP llamaba jugarse "el futuro de El Salvador."

Los empresarios parecían persuadidos de que los comicios redundarían en la pérdida del control ejercido por la "aplanadora ver-

de" sobre la asamblea. Con precisión de augur, el presidente de ANEP, Eduardo Funes Hartmann, había vaticinado a mediados de enero que "el PCN y el PDC no van a tener más de treinta diputados tras las próximas elecciones, es decir, que habrá una equiparación de fuerzas más conveniente en la asamblea" con lo cual la "oposición democrática" tendría las curules suficientes para "presentar un frente lo suficientemente fuerte como para que las nuevas leyes sean realmente estudiadas."<sup>12</sup>

Estas expectativas electorales han experimentado un cierto movimiento pendular en el curso de pocas semanas. Las encuestas previas al evento habían dado pábulo a un optimismo desaforado de la derecha. Este optimismo se transformó en un éxtasis exultante tan pronto el centro de cómputo de ARENA dio a conocer los primeros resultados del escrutinio de San Salvador y formuló a partir de ellos proyecciones que atribuían al partido entre 34 y 35 diputados. El desarrollo ulterior del escrutinio, impugnado por ARENA como parcialmente fraudulento, ha enfriado sensiblemente aquella euforia inicial.

Con todo, la estrategia política de la derecha parece estar siendo exitosa, y aunque el Consejo Central de Elecciones (CCE) no ha aceptado la mayoría simple que ARENA reclama en la asamblea, no es demasiado aventurado suponer que el año próximo ARENA pueda tomarse el ejecutivo y consolidar un dominio sobre los tres órganos del Estado. En cualquier caso, es destacable la aparente prudencia política con que la empresa privada se ha conducido durante el escrutinio y su exhortación a la Fuerza Armada a mantener "una absoluta imparcialidad, como lo determina la Constitución de la República." Siempre quedan algunas dudas sobre hasta qué punto ese llamado empresarial a la apoliticidad de la institución castrense obedece a que el

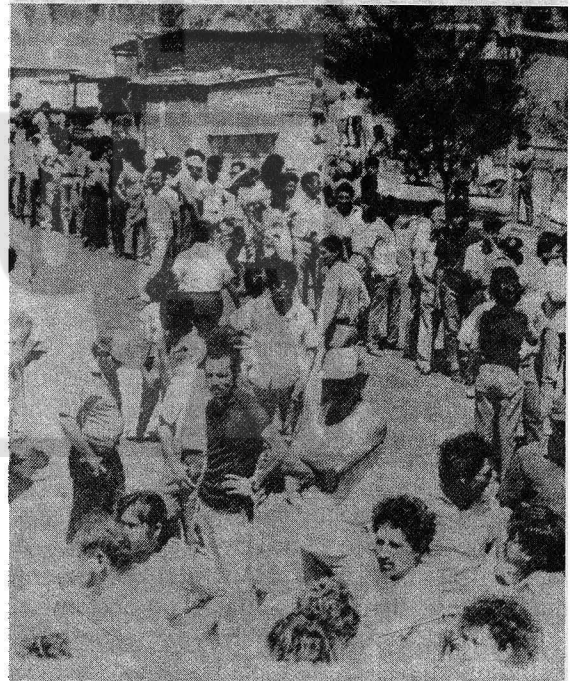
gran capital ya no percibe en la Fuerza Armada al aliado incondicional de otros tiempos, sino más bien a un poder extraño cuya actuación reciente ha avalado de hecho el proyecto de sus enemigos políticos, pero no puede desestimarse el dato de que los empresarios defiendan públicamente con tanto ahínco la vía electoral —y no el atajo del golpe de Estado— como camino para llegar al poder del Estado.<sup>13</sup>

Por su parte, en la misma línea de análisis de ANEP, y en un pronunciamiento emitido también el 18 de marzo, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES) interpretó los comicios del 20 de marzo como un evento histórico definitorio del futuro político del país, como una oportunidad irrepetible para "orientar la vida de la República en medio de los momentos difíciles y angustiosos en que ha sido colocada. El pueblo salvadoreño debe sopesar la importancia que su voto reviste en las actuales condiciones de la vida nacional;" "el próximo domingo nuestro pueblo tiene una cita con la historia para escoger el destino de la patria."<sup>14</sup> Asimismo, al igual que ANEP, la CCIES concibió el voto en la coyuntura del 20 de marzo como un "ineludible compromiso moral," como un "instrumento con el que (el pueblo salvadoreño) puede salvar al país de los trágicos padecimientos en que agoniza;" y en consonancia con ello, apeló a la "voluntad heroica de los salvadoreños, a fin de que desechen las consignas abstencionistas de la extrema izquierda." Igualmente, también para la Cámara el evento ofrecía la oportunidad de elegir "libremente a los hombres capaces de redimir la soberanía de la patria; de levantarla de sus escombros y dolorosas frustraciones."<sup>15</sup> De más está decir que los únicos sujetos capaces de esta tarea casi prometeica serían los hombres de ARENA.

En resumen, la posición de la gran empresa privada frente al evento electoral del 20 de marzo podría sintetizarse como sigue: los comicios legislativos y municipales no fueron un evento electoral más, sino que revistieron un

carácter histórico "trascendental". En éstos se jugaba "el futuro de El Salvador," esto es, la permanencia del PDC en el poder formal del Estado y con ello la prolongación del proyecto reformista que tantos males habría acarreado al país y a la empresa privada. Al mismo tiempo, secundariamente, representaban una oportunidad histórica para mostrar el repudio popular al FMLN y a su proyecto político. El grueso del sector privado considera que son los hombres de ARENA los llamados a ejecutar un proyecto político alternativo tanto al desastre de la gestión demócrata cristiana como a las amenazas de imposición del proyecto revolucionario.

La coyuntura electoral del 20 de marzo ha mostrado un proceso de concentración de las fuerzas de la derecha en torno a la hegemonía de ARENA. Si, a nivel formal, los empresarios estiman que una muestra de la implementación del proceso democratizador la constituiría la reactivación y el surgimiento de nuevos institutos políticos, a nivel real consideran que la mejor expresión política de sus intereses económicos se encuentra articu-



lada en ARENA y, en mucho menor medida, en otros partidos políticos como Liberación, PAISA o el PPS.

No obstante, habría otras fracciones empresariales, posiblemente ciertos sectores de la Sociedad de Comerciantes e Industriales (SCIS) que mostrarían alguna simpatía por el PCN. En cambio, las fracciones empresariales en las cuales el PDC podría encontrar algún respaldo, como pudieran ser la Federación Nacional de la Pequeña Empresa (FENAPES) o el Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños (CONAES), constituyen virtualmente una minoría insignificante en el seno del sector privado.

Por otra parte, no puede descartarse que ciertas fracciones empresariales minúsculas, de visión política más amplia, estimen como un avance del proceso democratizador el que se empiecen a abrir espacios políticos a la participación de alternativas de izquierda como la representada en Convergencia Democrática.

## 2.2. Las fuerzas laborales favorables al proceso electoral

Como en el caso de los sectores empresariales, las posturas del movimiento laboral organizado ante el evento electoral del 20 de marzo han sido perfectamente coherentes con sus posturas ante la crisis orgánica en que se debate el proceso político salvadoreño. Pero, a diferencia de lo que acontece con el sector privado, que en conjunto ha adoptado una posición más o menos homogénea frente a las elecciones, aun habiendo en él algún espectro de matices ideológicos, el movimiento laboral no ofrece, en cambio, una postura políticamente homogénea frente al proceso electoral.

De esta suerte, la reciente coyuntura electoral ha reflejado la variada composición de tendencias operantes dentro del movimiento laboral organizado, las cuales, no obstante su diversidad, pueden también reducirse a dos fundamentales: la de aquellas organizaciones

laborales que aceptan la implementación de procesos electorales como dispositivos eficaces para viabilizar la democracia y consideran que éste ha sido el caso particular del evento del 20 de marzo; y la de los sectores laborales organizados que estiman que en las actuales circunstancias de guerra y represión imperantes en el país, cualquier evento electoral está de antemano condenado al fracaso en términos de impulsar la democratización del proceso político. En el presente apartado abordaremos la postura del primer bloque de fuerzas laborales, dejando para más adelante el análisis del segundo bloque.

La principal organización integrante del bloque de fuerzas laborales que han valorado positivamente el evento electoral del 20 de marzo ha sido la Unión Nacional Obrero Campesina (UNOC). No podía ser de otra manera, tomando en cuenta las circunstancias de su fundación y la línea política que hasta el momento ha seguido.<sup>16</sup>

A tenor de sus pronunciamientos públicos sobre los comicios, la UNOC manifestó al igual que los empresarios, su convicción de que las alternativas de acción para incidir en el curso del actual proceso político salvadoreño deben estar mediadas por el juego electoral: "para escribir la historia y poder ejercer una lucha más fuerte y definida por la conquista de los derechos de los trabajadores, debemos actuar dentro de esa coordinada democrática, votando para elegir alcaldes y diputados el 20 de marzo."<sup>17</sup> Como ANEP y la CCIES, la UNOC considera también que "el voto es el arma definitiva para decidir nuestro destino."

Sin embargo, aun considerando los comicios como un hito significativo en el proceso salvadoreño, el planteamiento de la UNOC no muestra los tonos dramáticos, incluso casi apocalípticos, con los cuales las principales asociaciones gremiales de la empresa privada describen la coyuntura política que vive El Salvador. Y, sobre todo, a diferencia de los empresarios, la UNOC cualifica la importan-



## Votar por cualquier partido político significa votar por cinco años más de miseria, de hambre, de represión, de guerra...: UNTS.

cia del evento electoral en términos a los que el discurso empresarial no presta mayor atención, por lo menos explícitamente, esto es, en términos de su capacidad para viabilizar la pacificación del conflicto: "ante las próximas elecciones para alcaldes y diputados, es necesario que todos mediante ese derecho inalienable que nos permite nuestra Constitución Política, salgamos el 20 de marzo a votar pacíficamente, a decir al mundo entero que aun bajo el conflicto pensamos en la democracia y ansiamos vivir como sociedad civilizada." A diferencia de los empresarios, la UNOC explicita enfáticamente que, en las actuales circunstancias de guerra civil, el respaldo a la democracia que entrañan las elecciones debe concretizarse bajo la forma de un rechazo expreso a la guerra; y mientras ANEP defiende la necesidad de ratificar mediante el voto las "libertades individuales," la UNOC prefiere hablar de las "libertades fundamentales del hombre:" el voto será la ratificación de la voluntad popular, el rechazo a la guerra, respaldo a la democracia y las libertades fundamentales del hombre y el cambio definitivo para lograr el destino político de los años venideros.<sup>18</sup>

Desde luego, habría que historizar este discurso formal al nivel de la praxis política concreta que desarrolla la UNOC, arrastrada en los últimos meses por la feroz contienda intestina que se desarrolla en el PDC entre las corrientes del Lic. Julio Adolfo Rey Prendes y del Dr. Fidel Chávez Mena. Como resultado derivado de esa pugna, sectores importantes de la UNOC, descontentos con las maniobras desplegadas por la línea de Rey Prendes para consolidar el control de la "argolla" sobre las estructuras del partido, habrían empezado a fraguar alianzas fuera del PDC al menos desde finales de noviembre de 1987.

El 10 de diciembre pasado, el dirigente de la Unión Comunal Salvadoreña (UCS) y figu-

ra principal en la fundación de la UNOC, Samuel Maldonado, anunció que, después de una serie de negociaciones con el PCN, la UCS había obtenido de este partido la promesa de incluir en sus planillas diputadiles y municipales a varios afiliados de dicha organización. Al día siguiente, el secretario general de la FESINCONSTRANS y de la Central de Trabajadores Democráticos (CTD), Ricardo Soriano, manifestó que la junta directiva de FESINCONSTRANS no respaldaba la decisión de la UCS, porque "nuestras organizaciones son laborales, no políticas." A su vez, días más tarde, el secretario de organización de la UCS, Arturo Magaña, declaró que la experiencia del pacto social con el PDC había sido "bastante amarga," aunque al propio tiempo puntualizó que el apoyo de la UCS al PCN no sería institucional; sencillamente, el consejo ejecutivo nacional de la UCS había considerado necesario estar representados en la asamblea legislativa, "que es donde se toman las grandes decisiones del país, tales como la aprobación de leyes como las relativas a la reforma agraria... Creemos que tal vez el hecho de participar en elecciones y lograr algunos puestos sea beneficioso, especialmente para los campesinos que nunca en la historia de El Salvador han estado representados por sus propios dirigentes."<sup>19</sup>

También la Unidad Popular Democrática (UPD), la cual en las elecciones de 1984 representara la principal base social de apoyo de la victoria de Duarte, el 20 de marzo se mostró dividida en su apoyo al PDC, no obstante su respaldo genérico al proceso electoral mismo. Por un lado, la fracción de la UPD liderada por Ramón Aristides Mendoza,<sup>20</sup> manifestó que en el presente evento electoral ya no apoyaría al PDC por "su trayectoria de paquetes económicos, profundización de la guerra, represión selectiva, corrupción, agravamiento de la crisis, etc.," pero advirtió que tampoco respaldaría las pretensiones electo-

rales de otros partidos. Mendoza aseguró que "nos mantendremos como observadores."<sup>21</sup> La fracción pro-gubernamental de la UPD, en cambio, emitió el 15 de febrero un comunicado, suscrito por el secretario central y departamental de San Salvador, Francisco Pérez Díaz, en el cual expresaba que "ante la proximidad de un nuevo evento electoral y habiendo analizado las distintas alternativas que presenta el panorama político nacional, debemos hacer público nuestro apoyo total a los auténticos candidatos del pueblo que presenta el PDC."<sup>22</sup> En la misma línea, a mediados de marzo, la UPD reiteró una vez más su apoyo al PDC, en un comunicado que también suscribieron una fracción de la FESINCONSTRANS simpatizante del PDC, así como la Confederación General de Trabajadores (CGT), la Asociación Nacional de Empleados Postales (ANEPES), la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria (FE-CORASAL) y otras organizaciones menores integrantes de la UNOC. En dicho comunicado, estas organizaciones manifestaron públicamente su "apoyo solidario y total en las elecciones que se avecinan a todos los candidatos a diputados y concejos municipales del PDC y su programa de gobierno, conscientes de lo que significa su labor en el cambio de estructuras sociales."<sup>23</sup>

### 2.3. La Fuerza Armada

A lo largo del proceso electoral, la Fuerza Armada ha tratado de desempeñar el rol que el proceso de institucionalización del poder formal del Estado espera de ella, y hasta el momento parece haberlo cumplido satisfactoriamente.<sup>24</sup> Esta función no se ha circunscrito solamente al plano militar, al nivel del cual el accionar castrense estuvo orientado en las semanas previas a los comicios a desarticular las fuerzas guerrilleras en aquellas zonas en las cuales la presencia del FMLN pudiera haber causado mayores dificultades a la realización de las elecciones. Quizá el desarrollo de las operaciones "Libertad" y "Sufragio" no resultó tan efectivo como el

alto mando castrense hubiese deseado; el dato fáctico es que, pese a las advertencias intimidatorias del FMLN, las elecciones pudieron realizarse en la gran mayoría de municipalidades del país.<sup>25</sup>

Además de brindar seguridad a los preparativos y desarrollo logístico de los comicios, la Fuerza Armada ha actuado como garante del proceso electoral también por lo que respecta a su vigencia última, velando porque los resultados sancionados por el Consejo Central de Elecciones sean aceptados por todos los sectores del país, a despecho de las acusaciones de fraude que la propia derecha ha formulado contra la realización del escrutinio. Al igual que ocurriera en 1985, una vez más la institución armada ha cumplido el cometido de disuadir a la derecha de sus pretensiones de impugnar la validez de los comicios. No puede perderse de vista que el impulso original de este acoplamiento castrense al "proceso democrático" ha respondido a las presiones del gobierno de Reagan, pero tampoco puede descartarse que el ejército como institución haya ido asimilando a lo largo de estos años como una convicción propia la mayor viabilidad política del proyecto norteamericano-demócrata cristiano respecto de lo que sería un régimen desembozadamente oligárquico.

Si bien hay todavía dentro del ejército tandas de oficiales ligados por estrechos lazos biográficos a la derecha, la Fuerza Armada parece cada vez más consciente de que su propia supervivencia como institución está garantizada por el proyecto político reformista que Estados Unidos auspicia en el país más que por retorno al tipo de dominación oligárquica prevaleciente hasta 1979. Ello no quiere decir, desde luego, que el agente ejecutor local de ese proyecto deba seguir siendo el PDC, ni que la Fuerza Armada haya establecido un contubernio con la dirigencia demócrata cristiana, como en innumerables ocasiones se lo han echado en cara al alto mando los sectores más fanatizados de la derecha.<sup>26</sup>

Una muestra coyuntural de este nuevo rol institucional que la Fuerza Armada parece desempeñar cada vez con mayor naturalidad lo ha constituido su voluntad de mantenerse al margen de la polémica electoral, incluso en aquellos momentos en que los partidos contendientes trataron de involucrarla en beneficio de sus respectivos intereses electoreros. El caso más ilustrativo quizá lo ofrezca la polémica surgida entre el PDC y ARENA a raíz de las acusaciones que los principales dirigentes de este partido, particularmente el coronel Ochoa Pérez y el mayor D'Aubuisson, formularon contra la cúpula demócrata cristiana, acusándola de prolongar interesadamente la guerra para continuar medrando económicamente merced a los 500 millones de dólares enviados anualmente al país por Estados Unidos en concepto de ayuda económica y militar para financiar el conflicto. En sus primeras declaraciones, el coronel Ochoa no atinó a desligar con claridad a sus excompañeros de armas de las acusaciones de malversación. En declaraciones subsiguientes, en cambio, precisó meticulosamente que sus aseveraciones no se referían al alto mando castrense y menos aún a las bases del estamento militar, sino solamente a la dirigencia demócrata cristiana. En todo caso, independientemente de cuales fuesen las intenciones del coronel Ochoa o la estrategia de su partido al respecto, ni siquiera en ese momento el alto mando consideró pertinente involucrarse en la contienda electoral.

Otro punto de debate electoral en cuya discusión la institución armada evitó introducirse de lleno fue el relativo al derecho castrense a votar. La derecha, presuponiendo que el grueso de efectivos del ejército sería más afín a su punto de vista ideológico, intentó desarrollar una campaña para que se les permitiera formalmente ejercer el sufragio y se les dieran todas las facilidades para hacerlo. Pensaba que con ello dispondría de 60 mil votos más contra la democracia cristiana. La intervención final del alto mando zanjó la discusión sin comprometer la insti-

tucionalidad del ejército. En declaraciones ofrecidas el 8 de marzo, el Ministro de Defensa, General Carlos Eugenio Vides Casanova, indicó que "un promedio de 20 mil efectivos, de los 60 mil, ejercerán el sufragio. Esto, aprovechando un espacio que les quedará para emitir el voto dentro de su misión de cuidar urnas. Los demás efectivos no lo harán, porque estarán atendiendo la seguridad de la población o en operaciones militares en las zonas de guerra."<sup>27</sup> Al propio tiempo, sin embargo, el ministro subrayó que ello no implicaba en modo alguno que la Fuerza Armada abandonase su posición de neutralidad frente a la contienda electoral: "no vamos a servirle de escalón a nadie, ni a los que están en el gobierno ni a los que están fuera de él."<sup>28</sup>

### 3. Los críticos del proceso

La segunda vertiente de fuerzas sociales y políticas a que hacíamos alusión más arriba estaría integrada por los sectores y organizaciones que, en una primera aproximación, podrían calificarse como "críticos" del proceso electoral. Esta segunda vertiente comprendería todas aquellas fuerzas sociales y



políticas que, bien sea agrupadas en las organizaciones políticas o político-militares de izquierda, bien sea organizadas de modo autónomo, estiman que no existen todavía en el país las condiciones para un juego efectivamente democrático, de modo que las elecciones, en las circunstancias presentes, contribuyen en último término a legitimar el estado de cosas imperante y a favorecer la prolongación de la guerra. Aunque bajo diversos matices, el grueso de fuerzas integrantes de esta vertiente coincidiría en señalar que las elecciones son un componente político fundamental del proyecto de contrainsurgencia que Estados Unidos, la Fuerza Armada y el PDC han intentado llevar adelante a partir de 1980.

En general, ni el gobierno demócrata-cristiano, ni la Fuerza Armada, ni los sectores empresariales, ni la embajada norteamericana, han sido capaces de diferenciar matices en el interior de esta segunda vertiente de fuerzas contestatarias al proyecto reformista norteamericano-demócrata cristiano, y estiman que todas ellas por igual obedecerían a las consignas del FMLN y desempeñarían funciones específicas dentro del proyecto revolucionario.

Una muestra ilustrativa de ello la constituyen las reiteradas acusaciones formuladas por la Fuerza Armada en contra del movimiento laboral, no sólo de aquél aglutinado en torno a la UNTS, a quien los integrantes del sistema hegemónico consideran como mera fachada del FMLN, sino también en contra de organizaciones laborales que en determinado momento del proceso político fueron incluso base social de apoyo del proyecto reformista pero a las que la crisis socio-económica ha orillado finalmente hacia posiciones de contestación frente a la gestión demócrata cristiana y frente al proyecto político mismo vanguardizado formalmente por el PDC.

En esta segunda vertiente de fuerzas estarían todas las organizaciones agrupadas en

la alianza FMLN-FDR, así como los sectores laborales cercanos a la UNTS y gremios estudiantiles ideológicamente inspirados por el ideario político de la Universidad de El Salvador, pero entrarían también otras asociaciones gremiales y fuerzas sociales que han mantenido una línea de actuación autónoma respecto del FMLN-FDR, aunque coinciden con la alianza revolucionaria en el análisis de las causas estructurales que dieron origen y alimentan la crisis socio-económica y en la necesidad de darle fin al conflicto bélico a través de una solución dialogada a la cual concurren todos los sectores nacionales.

### 3.1. La posición de la alianza FMLN-FDR

La postura del FMLN ante las elecciones del 20 de marzo se mantuvo en la línea de lo que ha sido su posición de principio frente a los últimos procesos electorales habidos en el país, esto es, considerarlos como componente ideológico legitimador del proyecto de contrainsurgencia impulsado por el gobierno de Reagan en El Salvador. Aparte de las consignas abstencionistas difundidas por Radio Venceremos, la comandancia general del FMLN emitió en febrero un comunicado en el cual exponía su posición oficial frente al evento electoral. De modo más amplio, las mismas ideas se encuentran en el apartado octavo del documento interno del FMLN denominado "Organizar el 'fuego,' una necesidad para avanzar hacia la victoria," que el ejército incautara el 10 de febrero en el curso de un operativo de contrainsurgencia desarrollado en el cantón El Pepeto, Arcatao (Chalatenango). Por su parte, también los comandos urbanos del FMLN difundieron el 19 de enero un comunicado sobre las elecciones en base al mismo marco analítico de la comandancia general, aunque con una fraseología más cargada de epítetos y una tónica valorativa más radical.

La estructura analítica profunda de tales planteamientos permanece invariable respecto de cómo ha valorado el FMLN anteriores eventos electorales.<sup>29</sup> El punto de partida es

nuevamente "la convicción de que democracia es una palabra sin contenido en un país sin soberanía, donde el hambre, el desempleo, la miseria, la represión, los desaparecimientos, los escuadrones de la muerte, etc., están a la orden del día."<sup>30</sup> Mientras no se resuelva esta situación estructural de miseria y opresión, las elecciones serán un dispositivo puramente formal que, lejos de favorecer la instauración de la democracia, contribuirá a legitimar la ausencia de condiciones democráticas y a profundizar la crisis. Asimismo, el FMLN sostiene, en contra de las apreciaciones del gobierno de Reagan y del régimen demócrata cristiano, que las causas que dieron origen al conflicto no sólo no han desaparecido, sino que se han extendido y profundizado.

Sobre la base de este análisis, la principal conclusión que habría que sacar en el terreno de la praxis la constituiría la decisión de boicotear los comicios. El boicot electoral cumpliría dos propósitos fundamentales inextricablemente vinculados: desde el punto de vista estrictamente militar, al obligar a la Fuerza Armada a dispersar sus fuerzas y distraer recursos humanos y logísticos, el boicot dificultaría el desarrollo de los planes de contrainsurgencia; desde un punto de vista político, enfrentaría el poder local gubernamental impidiendo su restablecimiento en los lugares que han sido sometidos al control revolucionario o su reforzamiento en las zonas donde la actividad guerrillera lo ha puesto en crisis. Con ello se lograría el objetivo político-militar de evidenciar la dualidad de poderes existentes en el país, esto es, el poder emergente de la revolución y el poder institucional y tradicional del régimen imperante.

Sin embargo, pese a esta aparente claridad de principios, la estrategia político-militar a seguir para enfrentar los comicios mostraba ciertas ambigüedades. Por un lado, el FMLN afirmaba que el boicot electoral no era la política fundamental para enfrentar el proyecto contrainsurgente, en la medida en que éste rebasa la coyuntura del evento elec-

toral. El boicot electoral sería simplemente una línea más de la actividad guerrillera, a la par del sabotaje contra la infraestructura económica y contra la estructura de poder gubernamental, local y nacional. "El FMLN, a través del boicot electoral, no se propone impedir las elecciones burguesas, ni evitar el *show* electoral con masas haciendo colas y votando. Eso lo logra el régimen aún y cuando sólo participara el 20 por ciento o menos de los electores. (Esto, sobre todo, en la capital y ciudades grandes)... es el enemigo el que, como recurso propagandístico, necesita atribuirnos el argumento de que nuestro objetivo es impedir las elecciones para después dar la impresión también propagandística de que no alcanzamos el objetivo que falsamente se nos atribuye."<sup>31</sup> El FMLN, pues, admite la imposibilidad material de impedir las elecciones y aduce que es la Fuerza Armada quien le atribuye arteramente tal propósito.

Por otro lado, sin embargo, el FMLN persiste en hablar de "boicot electoral" y especifica incluso algunas de las tareas que esa estrategia contemplaría: "en las zonas de disputa y en todas aquellas otras que políticamente sea conveniente, debemos destruir registros electorales, decomisar carnet o cualquier otro tipo de actividades directamente orientadas contra las elecciones y sus aparatos constitucionales y recursos infraestructurales (locales), técnicos (maquinaria, listas electorales, etc.); esto tiene como objetivo mostrar o potenciar nuestro poder emergente y subrayar la existencia de dos poderes en el país."<sup>32</sup>

Por lo que respecta a las condiciones subjetivas de tal estrategia, el FMLN partiría de la premisa de que las masas, según lo revelaban las encuestas, experimentaban un "sentimiento de desaliento y desesperanza" ante la posibilidad de que las elecciones mejorasen su situación de miseria y de opresión política. El FMLN sostenía que este sentimiento debía profundizarse y extenderse "a través de una intensa propaganda y agitación, a través de todos los medios, propios o

que influenciarnos. Una propaganda que desmascare la demagogia electoral de los partidos y que evidencie y muestre con hechos prácticos que las elecciones no son solución a los problemas del pueblo, ni para el conflicto... entre más grande sea el contingente que desalentemos a la participación electoral, más se fortalece el contingente insurreccional; mientras más se debilite la mal llamada alternativa electoral, más se alentará el consenso por un nuevo gobierno."<sup>33</sup>

El componente propagandístico del boicot no se reduciría únicamente a la inducción de "formas de conducta política anti-electoras" en las masas. Aparejado a ello, el FMLN subraya la conveniencia de debatir con las bases de los partidos e "impulsar a todos sus niveles la conspiración y la línea de acercamiento o convergencia." En este marco, asegura que no está *a priori* en contra del sistema de partidos, sino tan sólo en contra de aquellos partidos que representan "los intereses privilegiados de pequeños grupos sociales en contra de los intereses mayoritarios del pueblo." A la luz de estos criterios, el FMLN abordó el dilema planteado al FDR sobre la conveniencia o no de incorporarse formalmente al sistema de partidos, en momentos en que Convergencia Democrática aún no adoptaba una decisión definitiva sobre su participación en la contienda electoral: "El papel del FDR es otro y es correcto que sus partidos aprovechen los espacios que se ha visto obligado el régimen a reconocérselos y es correcto también que ellos sepan manejar un discurso que se corresponda no sólo con el papel que juegan dentro de la alianza FMLN-FDR sino con su propia posición como partidos."<sup>34</sup>

Finalmente, como una característica específica de los comicios del 20 de marzo, y presumiblemente también de las próximas elecciones presidenciales, el FMLN estimaría que ambos eventos constituyen coyunturas en las cuales las contradicciones en el seno de la

clase dominante serán sensiblemente más agudas que lo que han sido en anteriores eventos electorales. Asimismo, consideraría que, dentro de esas coyunturas, el filo de su estrategia político-militar debería orientarse primariamente contra el PDC y sus aliados y secundariamente contra ARENA; aun cuando el proyecto político defendido por este partido pareciera más antagónico que el del PDC respecto del proyecto revolucionario, razones de orden táctico y estratégico aconsejarían al FMLN concentrar los mejores esfuerzos de su accionar contra el PDC, que hoy por hoy regenta formalmente todavía el proyecto norteamericano para El Salvador. Es presumible que mientras ARENA no ocupe el lugar del PDC como aliado principal de los norteamericanos, continuará siendo un blanco secundario del accionar del FMLN.

El sector político del FMLN-FDR compartió con el ala militar de la alianza el marco analítico de fondo y las apreciaciones fundamentales sobre el significado político de los comicios del 20 de marzo. Aunque Convergencia Democrática, fuese por razones de estrategia política, fuese porque en verdad no se había aclarado suficientemente a sí misma su ubicación en el contexto electoral, tardó varias semanas en adoptar una postura definida frente a las elecciones, su decisión final de no concurrir a ellas, anunciada oficialmente el 28 de enero, con ocasión de su integración formal como coalición, coincidió en sus puntos fundamentales con las valoraciones del FMLN.

Las declaraciones previas de los dirigentes de los partidos integrantes de Convergencia habían mostrado ciertas ambigüedades e incluso algunas contradicciones internas menores. Algunos voceros del Partido Social Demócrata (PSD) habían llegado incluso a anunciar, el 28 de diciembre, que el partido ya había decidido concurrir a la palestra electoral. En la última semana de enero, una delegación de Convergencia Democrática, en-

**Democracia es una palabra sin contenido en un país sin soberanía, con hambre, desempleo y miseria: FMLN.**

cabezada por Rubén Zamora y Héctor Oquellí, ingresó al país con el propósito de "evaluar la situación pre-electoral y conversar con otras fuerzas políticas" a efecto de "ampliar los espacios políticos existentes en el país, que conlleven a la creación de mayores niveles de convergencia en el espectro político y que permitan encontrar soluciones políticas y negociadas a la guerra."<sup>35</sup> Sin embargo, a pesar de ciertos repuntes de optimismo frente a la coyuntura política, Convergencia parecía más bien inclinada a considerar que el horizonte electoral no le ofrecía posibilidades efectivas para el desarrollo de su proyecto político. El presidente del FDR, Dr. Guillermo Ungo, lo formulaba así: "hay una serie de circunstancias políticas y prácticas que hacen difícil nuestra participación electoral ante la ausencia de una democracia real."<sup>36</sup> Al propio tiempo, los líderes de Convergencia estaban perfectamente conscientes de que el proyecto político que Estados Unidos pretende impulsar en El Salvador incluye como un componente fundamental el juego electoral. Pero visualizaban asimismo la necesidad de oponerse políticamente al proyecto contrainsurgente desde dentro y articular una alternativa política que pudiera atraer el consenso de amplios sectores del país.

Pese a las coincidencias de fondo con el FMLN, las deliberaciones de Convergencia en torno a algunas cuestiones específicas suscitaron ciertas fricciones al interior de la alianza FMLN-FDR. En particular, el boicot electoral pareció constituir un foco de debate. El secretario general del Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC), Rubén Zamora, era de la opinión de que la decisión de boicotear las elecciones constituía de hecho una manera de participar en ellas al convertirlas en un plebiscito. Con idéntico sentido pragmático, el subsecretario del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), Héctor Oquellí, puntualizó que las elecciones se terminarían por realizar, a despecho de las advertencias intimidatorias difundidas por Radio Venceremos. Ambos dirigentes distinguieron escrupulosa-

mente entre el carácter del MPSC y del MNR como partidos políticos autónomos, y su carácter de integrantes de la alianza FMLN-FDR y aseguraron que el FMLN no disponía de potestad alguna sobre su capacidad de decisión frente a la cuestión electoral. Finalmente, Convergencia Democrática anunció su decisión de no concurrir a las elecciones, no sin advertir expresamente que tal opción no debía interpretarse como un respaldo al boicot electoral, y que tampoco le impediría desarrollar una "presencia política orientadora" durante el proceso electoral.

Aparte de algunos argumentos de naturaleza formal, como el hecho de que el MPSC no estaba legalmente inscrito ante el Consejo Central de Elecciones, la decisión de Convergencia se sustentó en tres premisas principales. En primer lugar, en la persuasión de que las circunstancias de guerra civil imperantes en el país imposibilitan el desarrollo de un proceso electoral efectivamente democrático. "En realidad, poco importa qué planes económicos, políticos, sociales se tenga pensado realizar, si la guerra impide su normal desarrollo o implementación y de ahí que desde el principio cualquier iniciativa que no tome en cuenta el ponerle fin a la guerra está condenada al fracaso antes de ponerse en marcha."<sup>37</sup>

En segundo lugar, Convergencia Democrática estaba también persuadida de que, tal como estaban planteadas, las elecciones no solucionarían los problemas fundamentales del país porque en ellas "no están en juego aquellas opciones de solución a las necesidades que tiene el pueblo: vivir en paz con armonía y libertad y donde prevalezca la democracia. Para llegar a estos propósitos se hace indispensable un diálogo entre todos los sectores de la sociedad."<sup>38</sup>

En tercer lugar, Convergencia Democrática abrigaba serios reparos respecto del contenido de la oferta política que el sistema de partidos ponía a disposición del electorado: "hay que recordar que todos los partidos en

contienda están ubicados desde posiciones de derecha hasta la extrema derecha, y de ahí que sus posiciones sean antipopulares. Están más interesados en llegar al poder y servirse de él para sus propias conveniencias, que en buscar lograr la distensión del conflicto.<sup>39</sup>

Empero, la decisión de no participar en los comicios no impidió a Convergencia Democrática visualizar algunos avances relativos del proceso reformista. Entre ellos, Convergencia ha admitido que la instauración de una "democracia de fachada" ha permitido "someter a cierto control a las fracciones oligárquicas" tradicionales, al tiempo que ha logrado redefinir el papel de la Fuerza Armada como garante del "nuevo orden."<sup>40</sup> La Fuerza Armada ya no representaría, como en el pasado reciente, los intereses de una fracción particular de la clase dominante, sino los del sistema hegemónico en su conjunto, de modo que la gestión gubernamental pudiera quedar en manos de un "sector civil tecnocrático" sin que los militares estuviesen permanentemente encadenados por la tentación del golpe de Estado.

Por lo que respecta al plano de la praxis política, Convergencia Democrática no consideró en modo alguno que la decisión de no participar en las elecciones equivaliera a la pasividad política. Por el contrario, aseguró que se lanzaría a desarrollar un trabajo político de largo plazo encaminado al fortalecimiento de su proyecto político y a la promoción de una salida dialogada al conflicto bélico. "Tomando en cuenta estas consideraciones y asumiendo que las elecciones no son el camino adecuado para resolver la crisis, el pueblo salvadoreño tiene que asumir la necesidad histórica de organizarse y participar a través de la presión popular para lograr que se gobierne para el pueblo. Ante las condiciones actuales, lo único que puede permitir ese objetivo es un gobierno de consenso amplio, como base para lograr una solución política negociada a la guerra."<sup>41</sup>

### 3.2. Los sectores laborales críticos del evento

Las organizaciones laborales cuya crítica

del evento electoral del 20 de marzo mostró mayor radicalidad fueron las aglutinadas en torno a la Unidad Nacional de los Trabajadores Salvadoreños (UNTS), cuya dirigencia anunció el 10 de marzo que, a solicitud de las bases, las 467 organizaciones afiliadas a la Unidad habían acordado no ejercer el sufragio. Paradójicamente al igual que ANEP y la Cámara de Comercio e Industria, también la UNTS estimó que el evento electoral constituía una coyuntura "de mucha trascendencia en la vida nacional y de grandes repercusiones para el futuro del pueblo salvadoreño."<sup>42</sup> A diferencia de las principales organizaciones gremiales del sector privado, sin embargo, la UNTS no consideraba que las elecciones ofrecieran posibilidades reales para superar la grave crisis socio-económica en la cual se debate el país.

Consideradas a nivel genérico y formal, las elecciones le parecían perfectamente aceptables a la UNTS: "deseamos manifestar nuestro total respaldo a un proceso electoral como instrumento para escoger un gobierno comprometido con el ejercicio de una democracia real, un gobierno que respete y haga respetar la soberanía nacional y nuestro derecho a la autodeterminación. En estos términos, consideramos las elecciones como un instrumento valioso."<sup>43</sup> No obstante, las condiciones concretas de miseria económica y opresión política prevalecientes en El Salvador y, sobre todo, la "intervención sistemática y abierta" de Estados Unidos en el proceso socio-político salvadoreño —injerencia que la UNTS estima como el problema más grave que afronta el país— desvirtuarían el valor que las elecciones podrían tener genéricamente consideradas. "En tales circunstancias de intervención, muy a pesar de la vocación demócrata y patriótica de algunos partidos que participan en ellas, estas elecciones sólo son una herramienta utilizada por el gobierno de Estados Unidos para impulsar la contrainsurgencia a través de un Estado intervenido y moldeado para ese fin, para seguir pisoteando nuestra soberanía nacional y para legalizar a un gobierno útil a los intereses geopolíticos del



gobierno de Reagan.<sup>44</sup>

Valoraciones similares sobre el proceso electoral formuló por parte la Asociación Nacional Campesina (ANC), núcleo de la Unión Nacional Campesina (UNC), en un comunicado difundido el 4 de marzo. Al igual que la UNTS, la ANC manifestaba también su aceptación de la vía electoral formalmente considerada "como medio para elegir a un gobernante que se comprometa con el ejercicio de una plena democracia."<sup>45</sup> Sin embargo, en el país no se dan las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales mínimas ni las condiciones de soberanía y autodeterminación que requiere un "verdadero proceso electoral." En razón de ello, la ANC estimaba que, aun cuando en los comicios participasen algunos partidos políticos de "vocación democrática," "estas elecciones sólo son un instrumento utilizado por la administración de Reagan para profundizar la guerra en contra del pueblo salvadoreño... las elecciones de marzo de 1988 servirán para mantener la guerra y la intervención, más represión, más hambre y miseria."<sup>46</sup> El corolario práctico de ello era idéntico al adoptado por la UNTS: "repudiar el proceso electoral" y exhortar a sus bases a que "se abstengan de votar, ya que votar por cualquier partido político significa votar por cinco años más de miseria, de hambre, de represión, de guerra, capturas, de asesinatos, de desempleo, de encarcelamientos, de chantaje y división de nuestras organizaciones."<sup>47</sup>

No sólo las organizaciones laborales consideradas como fachada política del FMLN manifestaron una postura crítica frente a los comicios. También en el seno del movimiento laboral que en el pasado reciente formó parte de la base social de apoyo del PDC surgieron manifestaciones considerablemente críticas ante las elecciones. El caso más ilustrativo fue el del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), integrado por la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM) y la Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS). En un comunicado difundido el

12 de marzo, el FUT planteaba que, aunque las elecciones constituían un "instrumento válido para el logro de una verdadera democracia," la oferta política disponible no presentaba partidos capaces de conducir al país hacia la superación de la crisis: "lamentamos que para estas elecciones no exista un partido que resuelva los problemas a fondo del pueblo salvadoreño." Para el Frente Unitario de Trabajadores, las verdaderas elecciones son como "un mercado donde se encuentra de todo y para todos, es decir, que para el FUT las verdaderas elecciones son aquéllas donde participan todas las fuerzas políticas y donde nuestro pueblo participa con libertad, soberanía y con toma de conciencia para poder elegir aquellos gobernantes con un mínimo de solvencia moral."<sup>48</sup>

### 3.3. Otras fuerzas sociales críticas de los comicios

A la par de las organizaciones políticas y político-militares integrantes del FMLN-FDR, y de las agrupaciones laborales independientes y de izquierda críticas frente a los comicios del 20 de marzo, otras muchas fuerzas sociales manifestaron igualmente sus reservas respecto de la eficacia de las elecciones como dispositivo para viabilizar la democracia en la actual coyuntura política salvadoreña. Entre estas fuerzas habría que mencionar a la Universidad de El Salvador (UES) y a las organizaciones integrantes de la Unidad Universitaria (AGEUS, ADUES y el CCTU), así como a otros grupos de extracción pequeño-burguesa vinculados a la UNTS, como sería el caso de ANDES. De entre las valoraciones vertidas por estas fuerzas acerca de los comicios, el análisis más consistente de la coyuntura electoral ha sido el contenido en el comunicado que la UES difundió el 17 de marzo.<sup>49</sup>

El comunicado de la UES arranca de un análisis de la crisis salvadoreña como expresión de las contradicciones estructurales intrínsecas al modelo socio-político imperante en el país, en el contexto más global de una

crisis estructural del capitalismo dependiente y subdesarrollado. A efecto de superar la crisis, Estados Unidos habría impulsado en el país, a partir de 1979, un proyecto contrainsurgente reformista a través de 'la alianza democracia cristiana-Fuerza Armada. Este proyecto intentaría superar la crisis experimentada por el modelo liberal prevaleciente hasta 1979 y recomponer el viejo bloque histórico hegemonizado por la oligarquía terrateniente. No obstante, la UES considera que la vieja trilogía que sustentaba el bloque de poder, integrada por Estados Unidos, la Fuerza Armada y el partido de la oligarquía (el PCN) se reproduce ahora bajo la forma de una nueva trilogía, Estados Unidos-Fuerza Armada-partido contrainsurgente (PDC), que contiene en lo esencial la estructura opresiva y represiva del viejo bloque de poder.

En este marco, los procesos electorales constituirían mecanismos de legitimación social y de ajuste político del proyecto contrainsurgente-reformista y, al igual que los restantes componentes del mismo, apuntarían a la búsqueda de una solución militar del conflicto. Sin embargo, aunque dicho proyecto intenta aparentar la modernización de sus sistemas de participación popular y la apertura de espacios para el libre juego político, la realidad del país constituye un rotundo mentís a tal juego de apariencias, no sólo por el hecho de que amplios sectores poblacionales no participan en el proceso político nacional, sino también porque los aparatos de seguridad del Estado reprimen la organización laboral y otras formas de libre asociación garantizadas constitucionalmente. "Por ello las elecciones, que deberían ser expresión de la vigencia plena de la democracia, son en nuestro país el mecanismo utilizado para legalizar y legitimar lo contrario... las verdaderas opciones populares están excluidas del actual proceso electoral, por la inexistencia de verdaderas condiciones democráticas que garanticen la elección libre y la voluntad soberana del pueblo."<sup>50</sup>

#### 4. Consideraciones finales a modo de conclusión

Hemos intentado caracterizar someramente la posición que ante los comicios legislativos y municipales del 20 de marzo han asumido algunas de las principales fuerzas sociales y políticas involucradas en el proceso salvadoreño. El núcleo de esta caracterización ha sido elaborado a partir de la toma de posición explícita de dichas fuerzas ante el evento en cuestión, sea a través de pronunciamientos formales, sea a través de declaraciones informales de sus dirigencias. En todos los casos, hemos tratado de rescatar los contenidos latentes en los discursos a partir de una lectura hermenéutico-política que pudiera dar cuenta de su estructura profunda.

La caracterización de las fuerzas sociales y políticas consideradas no pretende ofrecer una descripción exhaustiva de sus posturas ante el evento, ni mucho menos describir la concepción de democracia que manejan o las ideas o actitudes que dichas fuerzas asumen frente a la crisis socio-política salvadoreña en general. Tampoco pretendemos una caracterización exhaustiva del espectro global de fuerzas sociales y políticas que se han manifestado frente a la coyuntura electoral. Ni siquiera hemos contemplado todas las fuerzas sociales y políticas involucradas en la coyuntura o las valoraciones que han formulado acerca de ésta. Por razones de delimitación metodológica, por ejemplo, no hemos tomado en cuenta a Estados Unidos, que si bien no constituye una fuerza social o política en el sentido que hemos sugerido en la introducción de este artículo, representa factualmente una fuerza histórica cuya influencia es decisiva para entender la dinámica del proceso socio-político salvadoreño y, específicamente, el significado que dentro de éste revisten los procesos electorales. Tampoco hemos tomado en cuenta a otras fuerzas sociales como las iglesias, en particular la Iglesia católica, que a pesar de evadir formalmente su compromiso institucional en la

esfera del poder político, a través de su influjo ideológico sobre amplios sectores de la sociedad civil, puede afectar indirectamente el curso y significado del proceso político.<sup>51</sup>

Las posturas que ante el evento electoral han adoptado las fuerzas sociales y políticas consideradas pueden clasificarse en dos vertientes fundamentales: las fuerzas que, en conjunto, han visto en los comicios un paso más en el proceso de institucionalización de la democracia; y las fuerzas que consideran que la ausencia de condiciones mínimamente democráticas, debido a la situación de opresión y represión imperante a todos los niveles (económico, político, etc.), y a las circunstancias de guerra generalizada, impide que en El Salvador pueda realizarse, *hic et nunc*, un evento electoral efectivamente democrático. Dentro de cada una de estas dos vertientes caben distintos matices y tendencias diversas.

No obstante, puede afirmarse también que, en conjunto, las fuerzas aquiescentes al proceso electoral tienden a sobrestimar la capacidad de éste para superar la crisis sociopolítica en que se debate el país, y a desestimar la urgencia de buscar otros canales políticos para articular un consenso nacional que dé fin a la guerra a través de una solución dialogada. Las fuerzas "contestatarias" al proceso electoral, en cambio, estiman que sólo a través de un diálogo pluralista entre todos los sectores nacionales, el cual debiera pasar por un gobierno de consenso nacional, puede empezarse a sentar los cimientos de la democracia en el país. Estas mismas fuerzas consideran que, en las actuales circunstancias de guerra, las elecciones no son la mediación idónea de ese consenso nacional.

Las elecciones del 20 de marzo han constituido un evento frente al cual el país no ha permanecido impassible. Ciertamente, como lo sugieren los índices de participación de votantes, la proporción del electorado potencial que acudió a las urnas evidencia un significativo nivel de escepticismo por parte de la

población salvadoreña ante las posibilidades históricas que las elecciones ofrecen para superar los graves problemas del país.<sup>52</sup> No es fácil determinar empíricamente hasta qué punto los sectores no organizados de la población salvadoreña siguieron los puntos de vista de las principales fuerzas sociales y políticas. Habría que determinar también, empíricamente, hasta qué punto la oferta política disponible en el mercado electoral influenció las actitudes del electorado. En cualquier caso, puede afirmarse que el evento electoral ha sido reflejo de un paulatino fortalecimiento de la sociedad civil. El que este fortalecimiento sea contradictorio y el que las fuerzas integrantes de la sociedad civil salvadoreña estén profundamente polarizadas no obsta para que empiecen a buscarse alternativas políticas que vayan reduciendo esa polarización y resuelvan eventualmente la crisis de hegemonía por la que atraviesa el bloque histórico imperante. De momento, no parece que el evento del 20 de marzo haya contribuido a ello. Razón de más para que las principales fuerzas sociales y políticas involucradas en el proceso emprendan con urgencia la tarea de estructurar un bloque histórico alternativo que sea capaz de satisfacer las demandas fundamentales del pueblo salvadoreño, tanto a nivel de sus necesidades materiales básicas de subsistencia, como de sus exigencias de participación política.

#### Notas

1. Mark B. Rosenberg, *¿Democracia en Centroamérica?* San José: Cuadernos de Capel, 1985. p. 10. Sobre el significado de los últimos procesos electorales habidos en la región, cf. Gabriel Gaspar Tapia, *Centroamérica: procesos políticos y actores internacionales. Un balance.* México: CINAS. Avances de investigación número 5, septiembre de 1986. Edelberto Torres Rivas. "Centroamérica: guerra, transición y democracia," *Estudios Centroamericanos (ECA)*, 1986, 456, pp. 879-893.
2. Desde luego, un análisis más ponderado del proceso socio-político salvadoreño y del significado de los eventos electorales, incluido el del 20 de marzo recién pasado, debiera superar el blanco-negro de estas dos posturas extremadamente simplificadas. Pero no es ése nuestro objetivo presente. Hay diver-

- tos trabajos analíticos sobre lo que muchos autores consideran el proceso de relegitimación del Estado salvadoreño, en el marco de lo cual habría que contextualizar la viabilidad de los procesos electorales. Cf. Sara Gordon, *Las vías de reconstitución del régimen salvadoreño*. San José: CSUCA. Cuadernos de investigación No. 15, agosto de 1987. Para la cuestión específica del significado político de los últimos procesos electorales, cf. Ignacio Ellacuría, "Visión de conjunto de las elecciones de 1984," *Estudios Centroamericanos (ECA)*, 1984, 426-427, pp. 301-324. Estudios Centroamericanos (editorial), "Las elecciones de 1985, ¿un paso adelante en el proceso de democratización?" *Estudios Centroamericanos (ECA)*, 1985, 438, pp. 205-214.
3. Véase, por ejemplo, la dificultad de precisar el concepto de "clase," incluso desde un horizonte analítico marxista. Cf. Ralf Dahrendorf, *Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial*. Madrid: Rialp, 1970.
  4. Segundo Montes, *El Salvador: las fuerzas sociales en la presente coyuntura*. San Salvador: UCA, 1984, p. 8. Pueden consultarse también otros trabajos relativos a la caracterización de las fuerzas sociales, organizadas y no organizadas, operantes en la sociedad salvadoreña. Cf. Ignacio Martín Baró, "Los sectores medios ante el plan Reagan: una perspectiva sombría," *Estudios Centroamericanos (ECA)*, 1983, 415-416, pp. 517-522. Segundo Montes, "El pueblo no organizado ante la situación del país," *Estudios Centroamericanos (ECA)*, 1983, 415-416, pp. 523-528. Francisco Javier Ibasate, "La empresa privada frente a los tres problemas nacionales: el plan norteamericano, las elecciones y la guerra," *Estudios Centroamericanos (ECA)*, 1983, 415-416, pp. 493-500. Segundo Montes, "Las fuerzas sociales ante el proyecto demócrata cristiano," *Estudios Centroamericanos (ECA)*, 1985, 439-400, pp. 380-388. Segundo Montes, "Los límites y posibilidades que enfrenta la participación política en el campo salvadoreño," *Estudios Centroamericanos (ECA)*, 1987, 463-464, pp. 305-321.
  5. Para esta distinción entre fuerzas "sociales" y "políticas," cf. el editorial de *ECA*, "La cuestión de las masas," *Estudios Centroamericanos*, 1987, 465, pp. 415-434. La distinción en cuestión puede encontrar una fundamentación última a nivel filosófico Cf. Ignacio Ellacuría, *Filosofía de la realidad histórica*. San Salvador: UCA, 1984, especialmente la parte relativa a las fuerzas que intervienen en el proceso histórico, pp. 493-505.
  6. Cf. el texto clásico de Hugues Portelli, *Gramsci y el bloque histórico*, México: Siglo XXI, 1980.
  7. Cf. Ernesto Cruz Alfaro, "Análisis global de la intervención norteamericana actual en El Salvador," *Estudios Centroamericanos (ECA)*, 1983, 415-416, pp. 543-556. *Estudios Centroamericanos*, "La política de Estados Unidos. Una mirada desde El Salvador," *Estudios Centroamericanos*, 1984, 425, pp. 156-162. *Estudios Centroamericanos* (editorial), "Estados Unidos y la democratización de Centroamérica," *Estudios Centroamericanos*, 1986, 450, pp. 255-274.
  8. Comunicado de ANEP sobre las elecciones, ver sección de "Documentación de esta edición."
  9. *Ibid.*
  10. *Ibid.*
  11. Esta demanda estaría recogida en la "Propuesta nacional de paz y libertad" de ARENA, que el Mayor D'Aubuisson hizo pública el 25 de enero. En una de sus cuatro áreas básicas, la propuesta contemplaba precisamente la formulación de un nuevo programa económico gubernamental diseñado en función de los intereses del sector privado.
  12. Ver *Proceso* 322, p. 5.
  13. La misiva que ANEP envió el 28 de marzo al presidente Duarte constituye una muestra de la nueva mentalidad con que los empresarios estarían enfrentando el proceso político salvadoreño. Para el texto de la carta, ver la sección de "Documentación" de esta edición.
  14. Mensaje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. "Exhortación al pueblo salvadoreño para ejercer su derecho al voto," ver sección "Documentación" de esta edición.
  15. *Ibid.*
  16. Un excelente análisis del surgimiento de la UNOC en el contexto global del movimiento laboral salvadoreño puede verse en Norman Casper, "El IADSL y la corrupción del movimiento sindical en El Salvador," *Estudios Centroamericanos*, 1986, 449, pp. 205-229.
  17. Comunicado de la UNOC: "El proceso histórico exige análisis profundo; ante ese reto UNOC hace sus planteamientos," ver la sección de "Documentación" de esta edición.
  18. *Ibid.*
  19. Cf. Diario *El Mundo*, lunes 25 de enero de 1988, p. 6.
  20. Cf. Casper, *op. cit.*, pp. 216 ss.
  21. *La Prensa Gráfica*, Jueves 11 de febrero de 1988, pp. 3-39.
  22. Diario *El Mundo*, lunes 15 de febrero de 1988, p. 5.
  23. *La Prensa Gráfica*, viernes 11 de marzo de 1988, p. 63.
  24. La intervención del estamento militar en la esfera del poder político ha sido una dolencia crónica del sistema socio-político salvadoreño, la cual ha inspirado diversos estudios analíticos. Cf. Mariano Castro Morán, *Función política del ejército salvadoreño en el presente siglo*, San Salvador: UCA Editores, 1984; Rafael Guidos Véjar, *El ascenso del militarismo en El Salvador*, San Salvador: UCA Editores, 1980; Steve C. Ropp, "Teorías sobre el comportamiento de los militares centroamericanos," *Estudios Centroamericanos*, 1986, 451-452, pp. 411-452, pp. 411-430. Sobre la participación más reciente de los militares en el proceso político salvadoreño, cf. el editorial de *ECA*, "Los militares y la paz social," *Estudios Centroamericanos*, 1984, 429-430, pp. 475-490; Susana Jiménez, "La Fuerza Armada ante las elecciones," *Estudios Centroamericanos*, 1984, 426-427, pp. 265-276.
  25. Una síntesis del accionar desarrollado por la Fuerza Armada para garantizar el desarrollo de los comicios en *Proceso* 328, pp. 10.11; 330, pp. 7-8.
  26. Cf. "Confrontación entre el MAN y la Fuerza Ar-

- mada," *Estudios Centroamericanos*, 1987, 462, pp. 331-334.
27. *Diario El Mundo*, miércoles 9 de marzo, p. 5.
  28. *Ibid.*
  29. Cf. Tomás R. Campos, "La estrategia del FMLN-FDR tras el proceso electoral de marzo de 1982," *Estudios Centroamericanos*, 1983, 415-416, pp. 479-490; Tomás R. Campos, "El FDR-FMLN ante las elecciones de 1984," *Estudios Centroamericanos*, 1984, 426-427, pp. 277-287. Cf. también el propio documento donde la alianza revolucionaria expone su posición al respecto, "El FDR-FMLN ante las elecciones de 1984," sección de documentación de ECA, 1984, 426-427, pp. 351-356.
  30. Documento del FMLN *Organizar el 'Fuego', una necesidad para avanzar hacia la victoria*. Apartado octavo, "Sobre la lucha contra la farsa electoral." Enero de 1988.
  31. *Ibid.*
  32. *Ibid.*
  33. *Ibid.*
  34. *Ibid.*
  35. Cf. *Proceso* 320, p. 5.
  36. *Ibid.*
  37. Análisis del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR): "Campaña poco prometedor," *Diario El Mundo*, viernes 11 de marzo de 1988, p. 5.
  38. *Ibid.*
  39. *Ibid.*
  40. *Ibid.*
  41. *Ibid.*
  42. *Valoraciones preliminares de la UNTS sobre las elecciones de marzo, 1988*, 15 de febrero de 1988.
  43. *Ibid.*
  44. *Ibid.*
  45. "Valoraciones sobre las próximas elecciones." Comunicado de la Asociación Nacional Campesina (ANC). *Diario El Mundo*, viernes 4 de marzo de 1988, p. 2.
  46. *Ibid.*
  47. *Ibid.*
  48. Comunicado del Frente Unitario de Trabajadores (FUT). *Diario El Mundo*, sábado 12 de marzo de 1988, p. 26.
  49. "Análisis de la Universidad de El Salvador sobre la democracia salvadoreña y el actual proceso electoral de diputados y alcaldes," ver sección de "Documentación" de esta edición.
  50. *Ibid.*
  51. En gran medida, la Iglesia católica reproduce en su interior las contradicciones prevaletientes en la estructura social salvadoreña. A diferencia de otras fuerzas sociales, la Iglesia es, por ello, una subestructura sumamente heterogénea y polarizada. Cualquier análisis que se intente hacer acerca de la posición de la Iglesia católica salvadoreña ante el evento del 20 de marzo no puede soslayar este dato. El análisis de Jon Sobrino con ocasión de los comicios presidenciales de 1984 podría iluminar un análisis de la postura de la Iglesia ante el reciente evento electoral. Cf. Jon Sobrino, "La Iglesia ante las elecciones," *Estudios Centroamericanos*, 1984, 426-427, pp. 288-298.
  52. En este mismo número de ECA puede consultarse un análisis de los resultados de los comicios y del nivel de concurrencia electoral, el cual no llegó siquiera al 50 por ciento del total de electores potenciales.